

Índice

Agradecimientos	15
Prólogo	17
I. Juicios por crímenes de lesa humanidad: un proceso que no termina de afianzarse	23
1. Juicios significativos	25
2. La otra cara del 2008	27
2.1. Hostigamientos impunes. El caso Puthod	28
2.2. Prisiones VIP. El caso Corres	29
2.3. Prófundos eternos	32
2.4. Publicidad restringida	33
2.5. El papel de las principales instituciones judiciales: diferencias entre la Procuración General de la Nación (PGN) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)	35
2.5.1. La voz del Ministerio Público	35
2.5.2. El silencio de la Corte Suprema	38
3. Mecanismos de impugnación a responsables de delitos de lesa humanidad	40
3.1. El caso Patti	41
a) ¿Patti candidato a gobernador? El visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA)	41
b) ¿Patti diputado de la Nación? El visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	44
3.2. Los casos Rico Tejeiro y Sassi Colombres	47
3.3. El proyecto de inhabilitación que el Congreso adeuda y los casos de 2009: Aldo Rico y los inspectores de Mauricio Macri	48
4. Programa Verdad y Justicia	50
5. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación	53
6. Los desafíos de la memoria como política de Estado	54
7. Los proyectos de sitios de memoria	56

Anexo estadístico: los números del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina	62		
1. Situación actual de los procesos en los que se investigan crímenes de lesa humanidad en todo el país	63		
1.1. Causas en movimiento	63		
1.2. Situación procesal de los implicados	70		
1.3. Condición de detención o libertad de los implicados	72		
1.4. Fuerza en la que los imputados cumplieron servicios	72		
2. Hacia el análisis de la evolución del proceso de justicia: comparación de los datos de 2007 y 2008	74		
2.1. Evolución de la situación procesal	76		
2.1.1. Total de condenados	76		
2.1.2. Total de procesados	79		
2.1.3. Total de prófugos	86		
2.1.4. Total de fallecidos e incapaces	90		
2.2. Evolución de las detenciones	92		
3. Dos ejemplos de justicia transicional en América Latina: análisis comparativo de los procesos en Chile y la Argentina	97		
3.1. A modo de introducción	97		
3.2. Algunas consideraciones respecto del proceso de justicia en Chile	98		
3.3. Datos estadísticos de los procesos penales por crímenes de las dictaduras en Chile y la Argentina	103		
3.3.1. Procesos en trámite	103		
3.3.2. Universo de procesados	105		
3.3.3. Universo de condenados	107		
3.3.4. Imputados según fuerza	108		
4. Palabras finales	110		
II. Violencia policial: las reformas pendientes en las instituciones de seguridad y los desafíos del Poder Judicial	111		
1. Introducción	111		
1.1. Violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense	113		
1.2. Algunos hechos de violencia policial ocurridos durante el período 2007-2008	116		
1.2.1. Manuel Gutiérrez Maturana, San Nicolás, provincia de Buenos Aires, 7 de octubre de 2007	116		
1.2.2. Raúl Mola, provincia de Córdoba, 31 de octubre de 2007	117		
1.2.3. Marcos Sebastián Itzcovich, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de marzo de 2008	118		
1.2.4. Gastón Duffau, Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, 23 de febrero de 2008	119		
1.3. Las respuestas de la justicia frente a la violencia policial	120		
1.3.1. Dificultades para lograr una investigación eficaz	121		
a) Medidas de prueba practicadas por personal de las comisarías involucradas	121		
b) Obstrucciones dentro del Poder Judicial. Importancia de la participación de familiares y víctimas	124		
c) Elasticidad de la figura de "legítima defensa"	129		
1.3.2. Respuestas judiciales que avanzan en la fijación de estándares sobre violencia policial	130		
2. Policía, grupos vulnerables y estándares de privación de la libertad	133		
3. Conclusiones	148		
III. Regresiones en las políticas de seguridad, una dirección de difícil retorno	151		
1. Introducción	151		
2. Discriminación, exclusión e información en los debates y políticas sobre la violencia y la seguridad	154		
2.1. Hechos y respuestas. Las "olas de inseguridad" de 2008	154		
2.2. Políticas públicas, producción y acceso a la información. Los retrocesos en los datos disponibles para el debate y análisis de la violencia y la inseguridad	161		
2.3. Territorio, desigualdad y violencia	168		
3. Instituciones de seguridad. Los pasos atrás en las reformas del sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la creación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires	174		
3.1. Desarticulación de las políticas de reformas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires	174		

3.2. Políticas de seguridad autoritarias y regresivas en la provincia de Mendoza	179	3.2.2. La elección de Abel Cornejo como vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Salta. El reconocimiento político a un "militante de la criminalización de la protesta	223
3.3. La aprobación de la ley de creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires	185	4. Conclusiones	226
4. Conclusiones	189		
IV. Nuevos actores en los conflictos en el espacio público. Desafíos y respuestas del Estado	191	V. La agenda de derechos humanos sin lugar para las personas privadas de libertad en la Argentina	229
1. Introducción	191	1. Introducción	229
2. El accionar de las instituciones de seguridad	195	2. La provincia de Buenos Aires, nuevamente escenario de políticas represivas y del agravamiento de la situación de las personas privadas de libertad	232
2.1. Las respuestas frente a los cortes de ruta realizados por las entidades agrarias	195	2.1. El enfoque político-criminal del gobierno de Scioli: nueva apuesta al endurecimiento del sistema de enjuiciamiento penal	233
2.2. Problemas en el uso de la fuerza en desalojos y manifestaciones	199	2.2. El aumento de la tasa de encarcelamiento y el plan penitenciario del gobierno provincial	239
2.3. La necesidad de ampliar los estándares a las situaciones de desalojo	201	2.3. Situaciones de violencia y tortura en establecimientos de detención de la provincia de Buenos Aires	244
3. Las respuestas de la Justicia a la represión de protestas sociales. Las dificultades para lograr un rol activo en la defensa de derechos	205	3. Las políticas carcelarias en el ámbito federal y la situación de las personas privadas de libertad	248
3.1. Los procesos judiciales contra hechos de represión de manifestaciones	207	3.1. Evolución de la población del SPF	249
3.1.1. El proceso judicial por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba y la represión de la protesta de los docentes de la provincia de Neuquén	207	3.2. Sobrepoblación y condiciones materiales de detención	252
3.1.2. La investigación sobre la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires	210	3.3. La persistencia de las prácticas violentas en las unidades del SPF	259
a) La intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 5 en la causa en la que se investiga la actuación de los autores materiales de los homicidios y lesiones	210	4. Desatención y debilitamiento del rol de los mecanismos de control frente a la grave situación de las personas privadas de libertad en el país	270
b) La elevación a juicio de las autoridades responsables de la represión	211	4.1. La falta de implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: el Estado en deuda frente a una problemática estructural	270
c) La situación procesal del ex presidente Fernando de la Rúa	212	4.2. El desgaste institucional de la PPN y el proceso de selección de un nuevo titular del cargo. El debate sobre la implementación del Protocolo Facultativo en el Congreso	273
3.2. La actuación de la Justicia en la regulación de la protesta social	213	5. Palabras finales	279
3.2.1. Las persistentes decisiones de la Justicia de criminalizar los cortes de ruta. La afectación a la democracia de los fallos contra Marina Schiffrin y Julio Alais	215		

VI. Políticas de defensa y derechos humanos para las fuerzas armadas	281	2. La situación de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo bajo la lupa de la justicia	337
1. Introducción	281	2.1. La CSJN decide atender el problema de manera integral y novedosa	337
2. La reforma del sistema de justicia militar	284	2.2. La CSJN ordena sanear la cuenca Matanza-Riachuelo	339
2.1. Las razones que impulsaron la reforma	284	2.3. El cumplimiento de la sentencia y su control	341
2.2. El nuevo sistema de justicia militar	289	2.4. El PISA de la cuenca Matanza-Riachuelo	345
2.3. Un régimen de disciplina militar	290	3. Nuevas dinámicas de interacción política y social	348
2.4. El proceso de implementación	291	3.1. Hacia una modificación de los modos de concebir las políticas públicas	349
3. Un defensor para las fuerzas armadas	292	3.2. La apertura de instancias de participación social en el diseño y control de las políticas	353
3.1. El ombudsman militar	292	3.3. La producción de información como requisito indispensable para el diseño de políticas y la participación pública	355
3.2. Proyectos de ley	293	4. Conclusiones	356
3.3. Reflexiones finales sobre la figura del ombudsman militar	295		
4. El caso de espionaje en Trelew	296	IX. El derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas usuarias de los servicios de salud mental	359
4.1. Los vaivenes de la causa	297	1. Introducción	359
4.2. La importancia de una conducción y un control efectivos de las actividades de inteligencia	300	2. El nuevo paradigma: las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derecho	361
5. Conclusiones	301	2.1. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un momento de oportunidad	361
		2.2. El Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y la situación de las personas con discapacidad	363
VII. Déficit habitacional y desalojos forzados en la Ciudad de Buenos Aires: apuntes sobre una política de expulsión y desresponsabilización	303	2.3. El derecho de defensa de las personas usuarias de los servicios de salud mental	364
1. Introducción	303	3. Las personas con discapacidad mental en el sistema judicial argentino	366
2. El déficit habitacional: modalidades y territorios "privilegiados"	305	3.1. El sostén del paradigma tutelar: un siglo y medio sin cambios en las reglas del Código Civil	366
3. Mucha política, pocas políticas: la respuesta estatal frente al déficit habitacional	313	3.2. La protección estatal ejercida a través de procesos judiciales sobre salud mental	367
4. Desalojos forzados en la ciudad: profundización de la crisis habitacional	317	3.3. Un caso paradigmático: la aplicación de terapia electroconvulsiva (TEC). El hábeas corpus para prevenir un posible acto de tortura o trato cruel, inhumano o degradante	372
4.1. Cuadro de situación	317		
4.2. El garante infractor: el rol del ONABE en los desalojos forzados de la CABA	321		
4.3. El rol del Ministerio Público Fiscal en la definición de la política criminal y la garantía de los derechos humanos	326		
5. Conclusiones	329		
VIII. En busca de soluciones judiciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo	333		
1. Introducción	333		

4. El papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)	377	6.1. La responsabilidad de los medios audiovisuales	422
4.1. La Corte promueve una nueva mirada del problema	377	6.2. La madre de todas las batallas	424
4.2. El abandono del sistema judicial: el caso "R., M. J."	378	6.3. Hacia la elaboración de estándares regionales	427
4.3. El aporte del fallo para los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental	380	6.4. Cambios en el COMFER y decisiones resistidas	431
4.4. Algunas conclusiones e interrogantes respecto de la incidencia de la doctrina de la corte en las políticas públicas de salud mental	383	6.4.1. El caso Continental-FM 104.3	432
5. La necesidad de contar con mecanismos de control activos	383	6.4.2. La polémica por los subtítulos ocultos	434
6. Ausencia de un movimiento consolidado de personas usuarias de los servicios de salud mental	389	7. Una nueva experta en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH	436
7. Hacia una ley nacional de salud mental	390	8. Conclusiones	439
8. Palabras finales	393	DEBATES	441
X. Hacia un ejercicio pleno de la libertad de expresión en la Argentina: el desafío de traducir los debates en políticas públicas	395	Sobre la televisación de los juicios por violaciones masivas a los derechos humanos	443
1. Introducción	395	El acceso al aborto permitido por la ley: un tema pendiente de la política de derechos humanos en la Argentina	451
2. La primera decisión de la Corte IDH sobre libertad de expresión en un caso argentino	397	1. Introducción	451
2.1. El desafío pendiente: la reforma de los delitos de calumnias e injurias en el ámbito del derecho penal y su correlato en materia civil	403	2. El contexto de las políticas de salud sexual y reproductiva	453
2.2. La necesidad de alcanzar un proyecto de reforma consensuado	405	3. Las obligaciones que surgen de los derechos a la salud sexual y reproductiva	457
2.3. Los primeros ecos de la sentencia en el ámbito judicial local	407	3.1. Obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad	458
3. La defensa de la libertad de expresión en la Corte Suprema: el caso Patitó	408	3.2. Obligaciones de respeto, protección y cumplimiento	458
4. Otro año de acceso restringido a la información pública	413	3.3. Otras categorías de obligaciones	459
4.1. La situación del INDEC y el sistema estadístico nacional	415	4. Cuestiones metodológicas	459
4.2. Avances en el ámbito regional	417	5. La disponibilidad de servicios de acceso al aborto no punible	460
5. Reglas claras para la distribución de la publicidad oficial: el caso del diario Río Negro	419	6. La accesibilidad de los servicios de aborto no punible	467
6. El debate por una nueva ley de radiodifusión	422	6.1. Las barreras legales	467
		6.2. Las barreras económicas	472
		6.3. Las barreras de información	472
		6.4. Las barreras geográficas	473
		7. La aceptabilidad de los servicios de aborto no punible	474
		8. La calidad de los servicios de aborto no punible	475
		9. Otros problemas vinculados al aborto	480
		10. Los actores políticos y el aborto	483
		11. Conclusiones	487
		Integran el CELS	493